

Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

En esta causa RUC N° **2100621307-0**, RIT N° **66-2022**, del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Antofagasta, por sentencia de diecinueve de abril del año en curso, se condenó a **Ozman Alejandro Castillo Herrera, Yustinth Gregorio Fuenmayor Quiroz y a Brian Alexander Torres Díaz**, a la pena corporal de **seis (6) años** de presidio mayor en su grado mínimo y al pago de una multa de cuarenta (40) unidades tributarias mensuales, como autores del delito consumado **de tráfico ilícito de estupefacientes**, perpetrado el 5 de julio de 2021 en el sector La Negra de la comuna de Antofagasta. Además, se les impuso las penas accesorias legales correspondientes.

Se ordenó el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, reconociéndole los abonos que precisó.

La determinación antes aludida, fue impugnada de nulidad por las defensas de los condenados, recursos que se conocieron en la audiencia pública del día nueve y diez de junio pasado, incorporándose el acta que da cuenta de su realización y en que se determinó la fecha de lectura de la sentencia para el día de hoy.

**CONSIDERANDO:**

1º) Que el recurso de nulidad interpuesto por la **defensa del acusado Torres Díaz**, invoca como causal principal, la prevista en el **artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal**, esto es, cuando, en cualquier etapa procesal del procedimiento, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías fundamentales, aseguradas por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, vicio que se configura producto



al actuar ilegal de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas con el que fue iniciado el procedimiento, que importó vulnerar el derecho fundamental al debido proceso, en su variante a un proceso previo legalmente tramitado, y el derecho a guardar silencio.

Señala que la infracción de garantías antes denunciada, se ha producido al haberse infringido los artículos 1°, 5° Inciso 2°, 6°, 7°, y 19 N° 3, 4 y 7 de la Constitución Política de la República, artículos 7 N°1, 2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 9° y 17 N°1 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, artículos 5, 8, 83, 84, 85, 129, 130 91, 93, 193, 194, 195, 196 del Código Procesal Penal y artículo 24 N° 2 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas.

Explica que los hechos que dan el sustrato fáctico a la presente causa son de fecha 5 de julio de 2021, oportunidad en la cual los acusados fueron fiscalizados por el funcionario de Aduanas, don Miguel Codoceo Rojas, fiscalización que inicia en el bus de la empresa Pluss Chile, cuyo itinerario era Calama-Santiago. En la mentada ocasión, el funcionario de Aduanas realiza una selección “aleatoria” de un grupo de personas, entre ellos, a don Brian Torres Díaz. En el mismo orden de ideas, y siempre dentro de la misma oportunidad, se produce la intervención de Carabineros.

Asegura que, conforme lo que se ha venido desarrollando, el actuar de los funcionarios de Aduanas reconoce como presupuesto concreto, la circunstancia que su defendido transportaba una botella con un líquido muy similar al agua, la que califica de atendible, en consideración al largo viaje que iniciaba, como lo es el trayecto de Calama a Santiago -de casi 24 horas- es del todo plausible, por tanto, no existía conducta o indicio alguno que hiciera presumir la introducción de



mercancías con infracción a la legislación aduanera, que habilitara a la autoridad fiscalizadora a hacer ejercicio de sus facultades de registro.

Agrega que este punto es del todo relevante, ya que los funcionarios de Aduanas tienen una actuación regulada y sus atribuciones no alcanzan a materias que son propias de las policías. Así, el artículo 24 numeral 2 del DFL N° 329, Ley Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de Aduanas, permite el registro realizado, únicamente dentro de los parámetros administrativos en que el referido Servicio tiene competencia, exigiendo para ello que existan antecedentes de los *“...que pueda suponer que haya mercancías introducidas al territorio nacional o que se intente introducir o extraer de él con infracción a la legislación aduanera”*, conforme lo dispone el referido precepto legal.

Postula a que si se permitiera, sin más, el ejercicio de las facultades de fiscalización de parte de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, lo que verdaderamente ocurriría, como aconteció en la especie, es que la Policía utilice estas atribuciones administrativas de control, para evitar cumplir con el estándar del artículo 85 Código Procesal Penal, que les impide una interacción con pasajeros sentados en un bus, sin que éstos realicen alguna conducta adicional que pueda vincularse con la comisión de un delito, justificándose este proceder únicamente en que los fiscalizados forman parte del *“perfil de riesgo”*. Al no haberlo decidido de esa manera, se ha infringiendo la garantía del debido proceso de su defendido.

Se denuncia, además, la infracción a la garantía fundamental a no auto incriminarse, además del estatuto legal que rodea a toda la primera declaración de imputado, prevista en el artículo 91 y 93 del Código Procesal Penal. Refiere que en el presente caso, el actuar de los funcionarios de Aduanas no satisface los parámetros que exige para proceder al examen y registro de vestimentas y

equipajes, al no haberse justificado algún elemento o indicio que diera cuenta que se estaba cometiendo o intentado cometer una infracción aduanera que motivara y permitiera esta interacción, excediéndose del mandato legal, en base al cual se obtuvo evidencia que pretende ser utilizada en el ámbito penal, infringiendo así las garantías procesales de su defendido.

Solicita se declare la nulidad del juicio y de la sentencia, se disponga la exclusión de toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público, la que deriva de la actuación cuya legalidad se impugna, para que el Tribunal de Juicio Oral no inhabilitado disponga la realización de un nuevo juicio, en que se conozcan y fallen los hechos materia de la acusación;

**2º)** Que, como causal subsidiaria, la defensa de Torres Díaz denuncia la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, al haberse incurrido en un error de derecho, al haberse rechazado la atenuante de responsabilidad de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal.

Hace presente que los sentenciadores denegaron la referida mitigante, básicamente por haber resultado suficiente la prueba de cargo, no haber reconocido el hecho, no haber ayudado al esclarecimiento del mismo y no ser sustancial la cooperación prestada en la fiscalización el día que ocurrieron los hechos.

Explica que el error de derecho se ha producido al momento en que los sentenciadores determinaron el sentido y alcance de la norma en comento por parte del tribunal, toda vez que una correcta interpretación de dicho precepto lleva a concluir que la disposición demostrada por el acusado con su reconocimiento, aporta información para el esclarecimiento de los hechos, incluso si se ha negado participación en el hecho punible.

En tal sentido, asegura que su representado prestó declaración en el juicio oral, situándose en el lugar de los hechos, explicó cómo se realizó la fiscalización aduanera sin negar la misma, alegando únicamente que en ese momento tenía la creencia de que el líquido transparente que debía llevar a un taller mecánico en Santiago se trataba de diluyente. Así, lo relevante para configurar la causal, son las acciones que positivamente se verificaron por parte de su defendido, en orden a facilitar la fiscalización, esto es, responder el interrogatorio aduanero, bajar del bus, permitir el registro de su equipaje, consentir en que se le tomen fotografías con las evidencias, permanecer en el lugar voluntariamente hasta que llegan funcionarios policiales sin estar esposado.

Luego de explicar la trascendencia del error de derecho denunciado, solicita que se acoja la causal alegada en forma subsidiaria, se anule únicamente la sentencia, y sin nueva audiencia pero separadamente, se dicte sentencia de reemplazo en la que se reconozca la concurrencia de las atenuantes del artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 68 inciso tercero del mismo código, se imponga a Torres Díaz la pena de **cinco años de presidio menor en su grado máximo**, se le condene al pago de veinte Unidades Tributarias Mensuales, y se le otorgue la pena sustitutiva de expulsión;

**3°)** Que, por su parte, recurren de nulidad **la defensa de los sentenciados Castillo Herrera y Fuenmayor Quiroz**, invocando como causal principal la contenida en el **artículo 373 letra b)** del Código Procesal Penal, esto es, haberse incurrido en un error de derecho, yerro que se habría producido al haberse rechazado la atenuante de colaboración sustancial, prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal.

Aseguran que, a diferencia de lo decidido, sus defendidos colaboraron al esclarecimiento de los hechos, prestaron declaración, se sometieron al

interrogatorio de todos los intervinientes, aportando datos sobre cómo es que se les encomendó la realización de dicho transporte de droga, reconociendo que tenían conocimiento de los elementos que transportaban, incluso entregando los detalles de cómo venía la sustancia, aportando con nombres y apodos, entrega de teléfonos, permitiendo tomarse fotografías con las especies incautadas y, mientras el servicio de aduanas realizaba procedimiento, entregando su identificación, bajando del bus voluntariamente, no escapando del lugar hasta la llegada de Carabineros, etc.

**En forma subsidiaria**, alegan la causal de nulidad prevista en el **artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con arts. 297 y 342 del mismo Código**, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos para su dictación.

En primer lugar, aseguran que la decisión recurrida se contradice al definir si la declaración prestada por sus representados durante la audiencia de juicio, configuró una admisión de responsabilidad, o si, por el contrario, los acusados controvirtieron los hechos que les fueron atribuidos en la acusación, por lo que en nada habría contribuido al esclarecimiento de aquellos, como se enfatiza en el considerando respectivo de la sentencia. Además, el tribunal omitió referirse a la interpretación doctrinal propuesta por la defensa, desestimándola sin indicar argumentos legales o doctrinales que sustentaran su decisión.

A juicio de ambas defensas, los defectos antes anotados, impiden reproducir el razonamiento del Tribunal para desestimar la configuración de la atenuante prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal.

De manera específica, el tribunal no estimó ni valoró la declaración de los imputados, en cuanto a la oportunidad en que habrían tomado conocimiento de que estaría transportando droga, ni la génesis de dicho transporte ni los detalles

del viaje, ni nada de lo que ocurrió al ser fiscalizados por funcionarios de aduanas y no por Carabineros.

Solicitan, en cuanto a la causa de nulidad alegada de manera principal, se anule el fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que sus representados sean condenados a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, otorgándoles la pena sustitutiva de expulsión. En cuanto a la causal subsidiaria, solicitan se anule el juicio oral y la sentencia condenatoria dictada, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrase una nueva audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto;

4º) Que en la audiencia realizada para el conocimiento del asunto, la defensa de Torres Díaz, para acreditar el vicio alegado de manera principal, se valió de la reproducción parcial de la declaración prestada en audiencia de juicio oral por los testigos Pedro Arancibia Manzor y Miguel Ángel Codoceo, en tanto el representante del Ministerio Público señaló los motivos por los cuales los recursos debían ser desestimados;

5º) Que en lo que concierne a los hechos que sustentaron la acusación del Ministerio Público, el basamento undécimo de la resolución reprobada tuvo por acreditado que: *“El día 05 de julio de 2021, en horas de la tarde, en circunstancias que personal de Aduana se encontraba realizando una fiscalización de vehículos en el sector La Negra, ubicada en el Km. 1355, de La Ruta 5 Norte, de esta ciudad, procedieron a la fiscalización del bus de la empresa Pluss Chile, PPU HYZB-63, Itinerario Calama- Santiago. Al ingresar al bus, un funcionario solicitó, previa selección, que diez personas descendieran para su revisión. Así, una vez fuera del bus, procedieron al control de los mismos, y al ver el contenido del equipaje de cuatro de dichos pasajeros, tres de ellos, posteriormente identificados como los acusados Brian Torres Diaz, Yustinth Fuenmayor Quiroz y Ozman*



Castillo Herrera, se procedió a un control más exhaustivo, lo que permitió determinar que éstos llevaban una sustancia líquida sospechosa, la que, una vez practicada la prueba orientativa, dio positivo a Ketamina. Luego, personal de aduana informó al fiscal de turno, quien instruyó a personal de OS7 constituirse en el lugar.

Al llegar al lugar, personal de OS7 es informado que Brian Torres Díaz portaba una mochila en la que transportaba y mantenía en su interior una botella transparente de 2,5 litros con la leyenda "Benedictino", cuyo contenido, una vez efectuada la prueba de campo, dio positivo a ketamina, y además una botella transparente de 1 litro, con la leyenda "Cielo" que contenía la misma sustancia, ambas con un peso total bruto de 3 kilos 550 gramos.

Por su parte, el acusado Yustinth Fuenmayor Quiroz, portaba un bolso que en su interior transportaba y mantenía una botella transparente de 3,0 litros con la leyenda "Benedictino", cuyo contenido, previa prueba de campo, también dio positivo a ketamina, y una botella color verde de 500cc con la leyenda "Sprite" que contenía igual sustancia, ambas con un peso total bruto de 3 kilos y 550 gramos.

Por último, el acusado Ozman Castillo Herrera, mantenía y transportaba un bolso de plástico color verde de hidratación, tipo camel back que, previa prueba de campo, también dio resultado positivo a ketamina con un peso bruto de 01 kilo 900 gramos. Así, los acusados fueron entregados a personal de la Sección Os7 de Antofagasta, quienes procedieron a su detención e incautación de especies.

El total de la droga encontrada en poder de los acusados correspondió a 9 kilos brutos de ketamina líquida.

Además, a Brian Torres Díaz se le incautó un teléfono celular, marca Motorola color negro, a Yustinth Fuenmayor Quiroz, un teléfono marca iphone, color blanco, y a Ozman Castillo Herrera la suma de \$7.000.- y 100 bolivianos".





Estos hechos fueron calificados por los magistrados como constitutivos del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al 1° de la Ley N° 20.000, en los que a los sentenciados Torres Díaz, Castillo Herrera y Fuenmayor Quiroz les correspondió participación en calidad de autores;

**6°)** Que, así entonces, el núcleo de lo debatido en el recurso, dice relación con la supuesta infracción a las garantías fundamentales del acusado Torres Díaz, producto a lo que habría sido un actuar ilegal de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas al practicar un registro sin contar con antecedentes objetivos de los que se desprenda que al momento de la fiscalización, los pasajeros inspeccionados se encontraban cometiendo una infracción aduanera, además de los errores de derecho y de fundamentación en que se habría incurrido en la sentencia, al haberse desestimado la atenuante de responsabilidad de colaboración sustancial, prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, respecto a los tres acusados.

Conviene aclarar desde ya, que para la decisión respecto de las causales en examen, esta Corte razonará sobre la base de los hechos establecidos por los jueces de la instancia en su fallo y ello es así, pues allí la prueba rendida se sometió al escrutinio de todos los intervinientes, así como del tribunal, bajo el respeto de los principios de bilateralidad de la audiencia, oralidad, publicidad e inmediación. Como corolario de esta actividad probatoria, los sentenciadores fijaron los hechos ya reproducidos en el fundamento que antecede, conforme a las normas que rigen la apreciación de la prueba en este proceso, de lo que se deriva que en esta sede no pueden desconocerse tales hechos, pues de modificarse los mismos, se transformaría el recurso de nulidad en una nueva instancia, condición que no se condice con la naturaleza del mismo;

7º) Que previo al análisis de las circunstancias en que se funda la supuesta infracción de garantías fundamentales denunciada en el libelo de nulidad deducido por la defensa de Torres Díaz, resulta necesario referirse en primer término a las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

Sobre el particular, el artículo 24 número 2 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N° 329 de 20 de junio de 1979, entrega a los funcionarios de Aduanas la facultad de examinar y registrar vehículos, personas, bultos, cajas, embalajes o cualquier envase en que pueda suponer que haya mercancías introducidas al territorio nacional con infracción de la legislación aduanera, facultad que debe ser ejercida en Zona Primaria o perímetros especiales de vigilancia que se sitúan en Zona Secundaria, caso éste último en el que los acusados fueron fiscalizados, ubicado en el sector La Negra, de la comuna de Antofagasta.

Ahora bien, a diferencia de lo alegado por la defensa de Torres Díaz, la potestad fiscalizadora del Servicio Nacional de Aduanas, puede ser ejercida sin necesidad de indicio alguno, en la medida que ésta se realice en Zona Primaria o en los perímetros de vigilancia especialmente dispuestos al efecto en Zona Secundaria, desde que se trata de una labor de naturaleza preventiva o de control, generalmente ubicadas en pasos fronterizos o lugares apartados, en los que el legislador ha decidido otorgar mayor preeminencia a otros intereses jurídicamente relevantes que concurren, como es el tráfico internacional de mercancías, control de fronteras, recaudación de impuestos, entre otros, cediendo ámbitos de protección periféricos a los derechos fundamentales que puedan concurrir, como el derecho a la intimidad de quienes transitan en esos espacios. (COTTER, Juan Patricio. Las Infracciones Aduaneras. 1º Ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, pp 5 a 10).

Esta delimitación del derecho, resulta concordante con la garantía fundamental de intangibilidad de los derechos, contenida en el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica, desde que la ponderación que en este caso ha realizado el legislador, no puede significar la afectación a los derechos fundamentales en su esencia.

Así lo han sostenido los autores José Díaz Cabiale, José y Ricardo Martín Morales, para quienes se trata de restricciones imponderadas de derechos, justificadas por el contexto en que se realizan estos registros (ámbitos preventivos, de seguridad y de control), por lo que no requieren la existencia de indicios previos a la restricción. Para los referidos autores, estos ámbitos de restricción administrativos son la fuente constitucional de los hallazgos casuales que devienen en la licitud de la prueba obtenida en su desarrollo. (Díaz Cabiale, José Antonio y Martín Morales, Ricardo, *“La garantía constitucional de la inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida”*, Editorial Civitas, Madrid, 2001, ISBN: 84-470-1605-6, pp.187 a 197).

Por consiguiente, los funcionarios de Aduanas se encuentran jurídicamente habilitados por la normativa en examen, para fiscalizar y efectuar registros en esos espacios de control de naturaleza administrativa, para lo cual no requerían contar con autorización judicial previa, ni menos con indicios o causa probable, por tratarse de ámbitos constitucionalmente justificados de intervención restrictiva, amparados normativamente.

Desde luego la conclusión antes anotada no importa una autorización para la arbitrariedad, pues ello atentaría contra el principio de igualdad, pero tampoco significa que se requiera de indicios, como postula la defensa, en similares términos a los que le son exigidos a las policías para efectuar un control de identidad, desde que tal exigencia no se ajusta al tenor literal del artículo 24 N° 2



del DFL 329, como tampoco guarda armonía con la *ratio legis* de la norma en examen.

No obsta a la conclusión antes anotada, la circunstancia que la parte final del numeral en estudio del artículo 24, refiera que esta facultad debe ser ejercida cuanto “...pueda suponer(se) que haya mercancías introducidas al territorio nacional...” con infracción a la normativa aduanera, como lo esgrime la defensa, desde que la inferencia a la que alude la norma en examen, dice relación con el lugar geográfico en donde se realiza la fiscalización y con características físicas o anatómicas del objeto, especie o habitáculo que se pretenda registrar, esto es, que pueda ser capaz de contener algún elemento de interés aduanero, con prescindencia de si existen o no razones de contexto para sostener que sí las contiene y, por tanto, se trata de consideraciones que nada tienen que ver con algún indicio que dé cuenta que el sujeto fiscalizado ha cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, a los que alude el artículo 85 del Código Procesal Penal;

8º) Que teniendo presente las reflexiones que anteceden, será desestimado el motivo principal de nulidad alegado por la defensa de Torres Díaz, pues quedó acreditado por los jueces del Tribunal Oral que funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, en un perímetro de vigilancia especial de Zona Secundaria, procedieron a fiscalizar un bus interurbano de transporte de pasajeros, en el que viajaban los encartados. En ese contexto, los funcionarios de Aduanas ejercieron sus atribuciones legales de control, descritas en el artículo 24 N° 2 del D.F.L. N° 329, Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de Aduanas, al registrar el equipaje de cuatro pasajeros, procediendo a realizar un control más exhaustivo a tres de ellos, los acusados, encontrando al interior de la mochila de Torres Díaz, una botella transparente de 2,5 litros con la leyenda “Benedictino” y

una botella transparente de 1 litro, con la leyenda “Cielo”, envases que contenían una sustancia que les impresionó como ilícita, circunstancia que importó la intervención del personal del OS7 de Carabineros que asistía el proceso de fiscalización, quienes procedieron a realizar la respectiva prueba de campo;

**9°)** Que no desvirtúa la conclusión antes anotada, la circunstancia que el personal de aduanas haya actuado en base a “*perfiles de riesgo*” como se alegó en el recurso, desde que principios como los de eficacia y eficiencia que informa todo acto de la administración del Estado, se derivan conceptos como el de “gestión de riesgos” con que deben ser ejercidas estas facultades fiscalizadoras, el que autoriza a efectuar un control direccionado a las operaciones sensibles, antes definidas como tales por esa autoridad, en función de la conformación de patrones de riesgo, de manera de armonizar un razonable equilibrio entre las labores de control de la autoridad Aduanera y la facilitación del comercio internacional (COTTER, *ut supra*, pp 5 y ss.);

**10°)** Que, en consecuencia, se desestimaré la causal principal invocada por la defensa de Torres Díaz, por cuanto, habiendo descartado que los funcionarios de Aduanas excedieron el mandato legal que los rige, ninguna infracción a las garantías procesales y derechos fundamentales del recurrente ha podido producirse;

**11°)** Que en cuanto a la causal de nulidad prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, opuesta en forma subsidiaria por la defensa de Torres Díaz, y como causal principal de los recursos deducidos por las defensas de Castillo Herrera y Fuenmayor Quiroz, serán analizadas conjuntamente, desde que se hacen consistir en el rechazo de la minorante de responsabilidad alegada por todos ellos, prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, yerro que, además, se fundamentan en similares términos;

**12°)** Que sobre el particular, basta señalar que, como ha resuelto uniformemente esta Corte en cuanto a las denuncias de infracción del artículo 11 N° 9 del Código Penal, en relación al artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, ponderar y dictaminar si la colaboración prestada por el acusado puede o no calificarse de sustancial para el esclarecimiento de los hechos investigados, es una decisión privativa de los jueces de la instancia, ya que sólo ellos pueden sopesar si la actividad desarrollada por los inculpados a lo largo del procedimiento, a la luz del cúmulo de evidencia reunida en el mismo, contribuyó o no a la labor jurisdiccional de esclarecimiento de los acontecimientos enjuiciados, labor que no puede desarrollarse en esta sede de nulidad, pues implicaría una nueva apreciación y valoración de todos los elementos que llevaron a los jueces de la instancia a la conclusión discutida por el recurso (entre otras, SCS N°s 24.887-2014, de 29 de diciembre de 2014; 37.024-2015, de 10 de marzo de 2016; y, 16.919-2018, de 13 de septiembre de 2018).

No es posible, por ello, analizar mediante este arbitrio eventuales inadvertencias sobre la concurrencia de la minorante en comento, motivo por el cual esta causal será desestimada;

**13°)** Que en lo tocante al primer motivo de nulidad subsidiario alegado por las defensas de Castillo Herrera y Fuenmayor Quiroz, explicitado a través de la proposición de la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal en relación al artículo 297 y 342 del mismo cuerpo de leyes, fundada genéricamente en la omisión que se habría incurrido en la sentencia, de expresar los fundamentos de la decisión de rechazar la atenuante de responsabilidad prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, y en haber expresado fundamentos contradictorios.

La impugnación de la sentencia fundada en la causal en análisis no dice



relación con las conclusiones a que han arribado los sentenciadores al apreciar la prueba producida en el juicio oral, del momento que en ese aspecto gozan de libertad; con la limitación de que al valorarla no se aparten de los principios, máximas y conocimientos arriba señalados, a fin de fundamentar debidamente el fallo para así controlar su razonabilidad. Sigue de ello que lo que sí es revisable por este medio de impugnación es la estructura racional del juicio o discurso valorativo sobre la prueba desde la perspectiva antes enunciada. En otras palabras, sólo es posible estimar el recurso por esta causal si el tribunal a-quo determina su convicción sobre la base criterios manifiestamente arbitrarios o carentes de racionalidad.

Por consiguiente, debe aclararse que la señalada omisión o contradicción no es tal, lo que se deduce de la sola lectura del fallo impugnado, de la que queda de manifiesto que la disconformidad real del recurrente está circunscrita a la valoración efectuada por el tribunal, la que no comparte. En efecto, lo anterior se aprecia en el motivo décimo tercero, donde el fallo reproduce los razonamientos que se tuvieron en consideración para llegar a las conclusiones que allí mismo se consigan, ya sea estimando la declaración de los sentenciados carentes de sustancialidad o trascendencia para su configuración, ya porque la prestada por el sentenciador pretendía más bien exculparlo de responsabilidad;

**14º)** Que en consecuencia y de todo lo analizado se concluye que los Jueces del Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia impugnada han cumplido a cabalidad con las normas legales que rigen la materia, sin que se advierta en ello algún vicio de los que invocan los recurrentes, por lo que se desestimarán los recursos por los dos motivos fundantes de la causal alegada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra a) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechazan** los recursos

de nulidad deducidos por las defensas de los acusados Ozman Alejandro Castillo Herrera, Yustinth Gregorio Fuenmayor Quiroz y Brian Alexander Torres Díaz, en contra de la sentencia de diecinueve de abril del año dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 2100621307-0, RIT 66-2022, los que, en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol N° 13.081-2022

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y Sra. María Teresa Letelier R. No firma la Ministra Sra. Letelier, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.





En Santiago, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

